

(Facultad de Comunicaciones y Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política) Ana María Stuken, experta en reinserción femenina: “Ojalá las mujeres pudieran ser sujetos de evaluación para transitar hacia prisión domiciliaria a partir de los 70 años”

¿Quiénes son las personas que yo creo que no debieran salir? Básicamente, las personas que han cometido delitos sexuales y que pueden volverlos a cometer a cualquier edad”.

Es distinto un hombre privado de libertad de 70 años que una mujer privada de libertad de 70 años. Las condiciones de envejecimiento de las mujeres al interior de los penales son mucho más complicadas”.

Frente a la aprobación, en general, en el Senado, del proyecto que busca conmutar penas a personas mayores de 80 años, entre otras, la académica, doctora en historia y experta en reinserción femenina Ana María Stuken considera que se trata de “un avance importante”.

La iniciativa propiciaría un cumplimiento alternativo de penas por parte de reos de avanzada edad que sufran enfermedades graves o terminales. Esto, según Stuken, es positivo, pues legislar en esta materia “es asumir un criterio de realidad respecto de las condiciones carcelarias en Chile”.

“Muy importante que el sistema tome en consideración la edad”

Stuken ha dedicado sus estudios a la participación femenina en política, y también a las vivencias de las mujeres privadas de libertad en el sistema carcelario.

Su última publicación fue en 2025 e incluye 33 testimonios de reclusas. Se titula “Salir del infierno: Historias de mujeres y cárcel”, coescrito con las académicas UC Verónica Undurraga e Ingrid Bachmann.

Hoy, Stuken es parte del directorio de la Corporación Abriendo Puertas, que está enfocada en acompañar y capacitar a reclusas en su proceso de reinserción social.

La especialista advierte a “El Mercurio”: “Es muy importante que el sistema penitenciario tome en consideración el tema de la edad de las personas que están recluidas, porque el Estado tiene la obligación no solo de custodiarlas, sino que de respetar sus derechos y preservar su dignidad”. Y agrega: “Entonces las personas que están en prisión no necesariamente tienen las condiciones adecuadas para poder vivir dignamente, por las condiciones carcelarias, por el hacinamiento”, comenta Stuken.

Sin embargo, la historiadora señala que la iniciativa aprobada en la Cámara Alta “todavía tiene que recibir una serie de indicaciones”.

Una de las primeras debiese apuntar, según ella, a que “haya consideración de género”.

Stuken ahonda en el punto: “Es distinto un hombre privado de libertad de 70 años que una mujer privada de libertad de 70 años”.

Esto, según la académica, se debe a que “los requisitos de salud de las mujeres, las condiciones de envejecimiento de las mujeres al interior de los penales son mucho más complicadas que las de la población masculina, por sus requerimientos. Y la cárcel no está en condiciones de ofrecerlas”.

Por ello, la académica propone reducir en el caso de las reclusas el mínimo de edad para otorgar la eventual

conmutación, considerando que “80 años, en el caso de las mujeres, es excesivo (...) Ojalá las mujeres pudieran ser sujetos de evaluación para transitar hacia prisión domiciliaria a partir de los 70 años”.

Respecto a eso, argumenta que esto sería un “beneficio familiar”, pues a “esa edad ya son adultas, ya debieran estar cuidando a sus nietos. Tienen responsabilidades familiares”, y, por tanto, señala, cumplirían “una mejor función junto a su familia en prisión domiciliaria, porque auxilia a la hija en el cuidado de sus hijos”.

Crear jueces de ejecución de pena

Otra de las propuestas de la investigadora corresponde a la creación de los “jueces de ejecución de pena”, figura que no forma parte del sistema judicial chileno.

En palabras de Stuvén, sería una institución encargada de fiscalizar y tomar decisiones “respecto a la ejecución de penas de personas que están privadas de libertad”, es decir, dedicarse “exclusivamente a eso”. Aunque, frente a la ausencia de esta entidad, la historiadora enfatiza que “deberían ser los jueces los que tomen decisiones al respecto”.

“Me preocuparía de que no hubiera ninguna excepción a la ley”

El proyecto ha generado críticas desde el oficialismo, pues apuntan a que permitiría conmutar penas a reclusos por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, Stuvén enfatiza en que no se les otorgará libertad, sino que “van a pasar a prisión domiciliaria”.

No obstante, a la experta le preocupa “que no hubiera ninguna excepción a la ley y que bastara con las condiciones de salud”, ya que, desde su expertise, señala que “debieran haber excepciones, que deben estudiarse detalladamente”. Esto, reitera la académica, “ojalá cayera en manos de jueces de ejecución de pena”.

Sobre los posibles casos en los cuales debería haber objeciones, Stuvén da un ejemplo: “El hecho de tener presión arterial alta no debiera calificarte automáticamente para recuperar la libertad”.

Y añade: “¿Quiénes son las personas que yo creo que no debieran salir? Básicamente, de todas maneras, las personas que han cometido delitos sexuales y que pueden volverlos a cometer a cualquier edad”.

Ana María Stuvén es especialista en reinserción social femenina.

RIENZHI FRANCO

A 24 horas de ser aprobado en su idea de legislar en el Senado, el proyecto de cumplimiento alternativo de penas para personas mayores o enfermas —80 años o 70 años, en algunos casos— mantiene confrontados al oficialismo y la oposición. Los primeros rechazan la propuesta, mientras que los segundos la respaldan.

Lo álgido del debate ha opacado el alcance de la iniciativa, que se relaciona con cuatro factores: las cifras de eventuales beneficiados; los mecanismos para supervisar el cumplimiento alternativo; los casos que más complican a la opinión pública y las causales que incidirían en el beneficio carcelario.

La discusión se entrecruza con la entrega de beneficios a presos de Punta Peuco, aunque el texto sería de aplicación general a quienes cumplan los requisitos para optar a la conmutación.

Acerca de las cifras, la información entregada a "El Mercurio" por el Gobierno, mediante antecedentes provistos por Gendarmería, afirma que (al 31 de diciembre de 2025) hay 824 personas mayores de 70 años privadas de libertad, de las cuales 738 se encuentran condenadas (698 hombres y 40 mujeres). Estas últimas son, precisamente, las que podrían verse beneficiadas.

De ellas, 365 están condenadas por delitos comunes (18 con presidio perpetuo), con el siguiente desglose: 195 condenas por abusos sexuales; 143 condenas por delitos de violación; 40 condenas por delitos de homicidios y cinco por parricidio.

Además, existen 1.984 personas privadas de libertad (al 26 de septiembre de 2025) que presentan algún tipo de discapacidad (1.852 hombres y 132 mujeres); de ellas, 999 tienen discapacidad física; 482, discapacidad sensorial visual; 182, discapacidad mental psíquica; 114, discapacidad auditiva; 52, mental-intelectual, y 155, no especificada.

En cuanto a los ilícitos por los que fueron condenadas esas personas, la mayor cifra corresponde a tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad (6,9%); delitos sexuales (5,1%); delitos funcionarios (4,7%); homicidios (4,2%) y lesiones (4,1%).

Oficialismo acusa redacción laxa

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ha sido de los más críticos de la iniciativa, al exponer el alcance del eventual bene-

Fue aprobado en general, pero se anticipan más de 100 indicaciones para cambiarlo:

Gobierno cifra en 738 los reos mayores o enfermos que se beneficiarían con proyecto para conmutar penas

El Ejecutivo es crítico de la iniciativa, al punto de que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), dijo a TVN que "no es enmendable", dando a entender que ni siquiera puede mejorarse vía modificaciones.



El ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), cuestionó el proyecto para conmutar penas, acompañado de integrantes de agrupaciones de DD.HH.

Corte Suprema instruye volver a revisar la admisibilidad de un recurso en favor de un condenado de 95 años

La Corte Suprema ordenó al tribunal de alzada sanmiguelino volver a revisar la admisibilidad de un recurso en favor de un condenado por violaciones de los derechos humanos —que había sido declarado inadmisiblemente— y que se pronuncie "derechamente sobre el amparo deducido".

El recurso es en favor de César Manríquez (95), exjefe de la Brigada de Inteligencia del

Ejército, y en aquel se pide aplicar un procedimiento legal especial que dispone que en casos en que la persona presenta "enajenación mental", como ocurre aquí, debe suspenderse la pena y entregarse al interno al cuidado de su familia o institución de beneficencia para su tratamiento.

Se trata de una decisión judicial que se adoptó en la antea de que el Senado

aprobara, de manera muy ajustada, el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas de cárcel, que incluye a este tipo de sentencias.

El voto de mayoría fue de los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, además de la abogada integrante Pia Tavolari. La disidencia fue de la ministra María Cristina Gajardo.

La Corte Suprema ordenó al tribunal de alzada sanmiguelino volver a revisar la admisibilidad de un recurso en favor de un condenado por violaciones de los derechos humanos —que había sido declarado inadmisiblemente— y que se pronuncie "derechamente sobre el amparo deducido".

ficio a condenados por causas de lesa humanidad.

Ante los señores, la autoridad no solo cuestionó la propuesta. Añadió también que podrían acceder "gracias a este proyecto 10.102 personas privadas de libertad que presentan alguna enfermedad crónica, varias de las cuales se encuentran en recintos de máxima seguridad y que han sido condenados por delitos de crimen organizado".

Las declaraciones del ministro PC se condicionan, afirman los detractores del proyecto, con la amplitud de las causales para aplicar el beneficio, lo que está radicado en el artículo tercero de la iniciativa, en orden a que el tri-

bunal deberá, a petición de parte o de oficio, disponer el cumplimiento de la pena impuesta en una modalidad de reclusión domiciliaria total, por el tiempo que reste de condena, cuando al interno enfermo, la privación de la libertad en el establecimiento carcelario, por cualquier motivo, le impida recuperarse o tratar

adecuadamente su enfermedad crónica; al que padezca una enfermedad incurable en período terminal; al discapacitado, cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; y al interno mayor, cumplidos 80 años o

más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, pero teniendo una edad mínima de 70 (setenta) años.

En parte por esa redacción, que se califica de laxa, por parte del oficialismo, comités parlamentarios como el socialista ya anticiparon la presentación de una batería de enmiendas al proyecto de cumplimiento alternativo de penas.

El ministro Gajardo dijo a TVN que el proyecto "no es enmendable", dando a entender que ni siquiera puede mejorarse a través de modificaciones. Así, el Ejecutivo buscaría que la propuesta se "reescribiera".

Como sea, eventuales ajustes podrán realizarse en el actual trámite en particular en el Senado, para el que se abrió plazo de indicaciones hasta el 16 de marzo.

■ Cómo operaría el procedimiento para aplicar la conmutación a los convictos

En un artículo cuarto de la propuesta aprobada en general por la Cámara Alta se fija el procedimiento para la aplicación del beneficio.

Así, expresa que "para el objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores, el Tribunal deberá, a petición de parte o de oficio, acompañar al proceso los antecedentes médicos que certifiquen la enfermedad, discapacidad o deterioro físico y mental que justifiquen

la sustitución de la pena por la de reclusión domiciliaria total, los que deberá comprender aquellos emitidos por el Ministerio de Salud; así como los antecedentes que acrediten el aplazamiento transitorio de la pena o la sustitución de la misma, en el caso de la letra d) del artículo tercero".

Junto con lo anterior, el proyecto que tramita la Cámara Alta dispone: "La reclusión domiciliaria total importa la

privación total de libertad en el domicilio del interno, con las condiciones que establezca el Tribunal, y bajo el monitoreo constante de la autoridad penitenciaria, sin perjuicio de las autorizaciones que a petición de parte o de oficio, se otorguen para que el interno acuda a sus controles médicos, y dejando siempre a salvo los casos de urgencia médica vital, las que deberán ser informadas al tribunal al día siguiente habiéndose ocurrido el

infortunio".

Para los críticos de la redacción del proyecto, resulta crucial un informe de la Corte Suprema de mayo de 2025 sobre la iniciativa.

En aquel oficio efectivamente se hace alusión, en uno de sus párrafos, a que "uno de los principales problemas de esta norma es la falta de claridad en la definición de las enfermedades que justifican el otorgamiento del beneficio.

Ana María Stiven, experta en reinserción femenina: "Ojalá las mujeres pudieran ser sujetos de evaluación para transitar hacia prisión domiciliaria a partir de los 70 años"

AMANDA ASTUDILLO CAÑAS

Frente a la aprobación, en general, en el Senado, del proyecto que busca conmutar penas a personas mayores de 80 años, entre otras, la académica, doctora en historia y experta en reinserción femenina Ana María Stiven considera que se trata de "un avance importante".

La iniciativa propiciaría un cumplimiento alternativo de penas por parte de reos de avanzada edad que sufran enfermedades graves o terminales. Esto, según Stiven, es positivo, pues legislar en esta materia "es asumir un criterio de realidad respecto de las condiciones carcelarias en Chile".

"Muy importante que el sistema tome en consideración la edad"

Stiven ha dedicado sus estudios a la participación femenina en política, y también a las vicisitudes de las mujeres privadas de libertad en el sistema carcelario.

Su última publicación fue en 2025 e incluye 33 testimonios de reclusas. Se titula "Salir del infierno: Historias de mujeres y cárcel", coescrito con las académicas UC Verónica Undurraga e Ingrid Bachmann.

Hoy, Stiven es parte del directorio de la Corporación Abriendo Puertas, que está enfocada en acompañar y capacitar a reclusas en su proceso de reinserción social.

La especialista advierte a "El Mercurio": "Es muy importante que el sistema penitenciario tome en consideración el tema de la edad de las personas que están reclusas, porque el Estado tiene la

obligación no solo de custodiarlas, sino que de respetar sus derechos y preservar su dignidad". Y agrega: "Entonces las personas que están en prisión no necesariamente tienen las condiciones adecuadas para poder vivir dignamente, por las condiciones carcelarias, por el hacinamiento", comenta Stiven.

Sin embargo, la historiadora señala que la iniciativa aprobada en la Cámara Alta "todavía tiene que recibir una serie de indicaciones". Una de las primeras debiese apuntar,

según ella, a que "haya consideración de género".

Stiven ahonda en el punto: "Es distinto un hombre privado de libertad de 70 años que una mujer privada de libertad de 70 años".

Esto, según la académica, se debe a que "los requisitos de salud de las mujeres, las condiciones de envejecimiento de las mujeres al interior de los penales son mucho más complicadas que las de la población masculina, por sus requerimientos. Y la cárcel no está en condiciones de ofrecerlas".

Por ello, la académica propone reducir en el caso de las reclusas el mínimo de edad para otorgar la eventual conmutación, considerando que "80 años, en el caso de las mujeres, es excesivo (...). Ojalá las mujeres pudieran ser sujetas de evaluación para transitar hacia prisión domiciliaria a partir de los 70 años".

Respecto a eso, argumenta que esto sería un "beneficio familiar", pues a "esa edad ya son adultas, ya deberían estar cuidando a sus nietos. Tienen responsabilidades familiares", y, por tanto, señala, cumplirían "una mejor función junto a su familia en prisión domiciliaria, porque auxilia a la hija en el cuidado de sus hijos".

Crear jueces de ejecución de pena

Otra de las propuestas de la investigadora corresponde a la creación de los "jueces de ejecución de pena", figura que no forma parte del sistema

judicial chileno.

En palabras de Stiven, sería una institución encargada de fiscalizar y tomar decisiones "respecto a la ejecución de penas de personas que están privadas de

libertad", es decir, dedicarse "exclusivamente a eso". Aunque, frente a la ausencia de esta entidad, la historiadora enfatiza que "deberían ser los jueces los que tomen decisiones al respecto".

"Me preocuparía de que no hubiera ninguna excepción a la ley"

El proyecto ha generado críticas desde el oficialismo, pues apuntan a que permitiría conmutar penas a reclusos por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, Stiven enfatiza en que no se les otorgará libertad, sino que "van a pasar a prisión domiciliaria".

No obstante, a la experta le preocupa "que no hubiera ninguna excepción a la ley y que bastara con las condiciones de salud", ya que, desde su expertise, señala que "deberían haber excepciones, que deben estudiarse detalladamente". Esto, reitera la académica, "ojalá cayera en manos de jueces de ejecución de pena".

Sobre los posibles casos en los cuales debería haber excepciones, Stiven da un ejemplo: "El hecho de tener presión arterial alta no debería calificarse automáticamente para recuperar la libertad".

Y añade: "¿Quiénes son las personas que yo creo que no deberían salir? Básicamente, de todas maneras, las personas que han cometido delitos sexuales y que pueden volverlos a cometer a cualquier edad".

Ana María Stiven es especialista en reinserción social femenina.

